

186-2015

Presidencia de la República de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública: En la ciudad de San Salvador, a las quince horas y dos minutos del once de agosto de dos mil quince.

El suscrito Oficial de Información, CONSIDERANDO que:

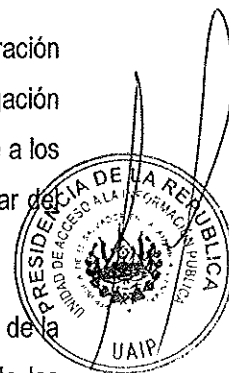
1. El día diez de agosto de los corrientes se recibió solicitud de acceso a la información pública de parte de la señorita [REDACTED] por medio de correo electrónico, quien requiere conocer de parte del Organismo de Inteligencia del Estado: *los documentos que indiquen cuantas personas han sido desplazadas de sus hogares y en qué departamentos, municipios, colonias y barrios dentro de El Salvador o hacia afuera del país, por motivos de violencia, acoso o amenaza de las pandillas y/o extorsiones; desagregando tales datos por fechas.*
2. A partir del deber de motivación genérico establecido en el artículo 65 LAIP, las decisiones de los entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante, con mención breve pero suficiente de sus fundamentos.

Con base a las facultades legales previamente señaladas, se hacen las siguientes consideraciones:

***I. Sobre el proceso de acceso y la distribución de Unidades de Acceso a la Información Pública de los entes obligados.***

A partir de la naturaleza del procedimiento de acceso a la información pública, para la correcta configuración del acto administrativo se requiere de una serie de elementos para dar cumplimiento pleno a la obligación establecida en el artículo 2 LAIP. Entre ellos la existencia de un sujeto legalmente apto para dar trámite a los requerimientos de acceso a la información pública de los interesados, lo cual únicamente puede derivar del marco de competencias atribuidas a cada uno de los entes obligados por la ley.

En tal sentido, la competencia entendida como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano de la Administración atribuida por la ley a cada uno de los entes obligados. De manera que, la gestión de los negocios públicos pueda realizarse de manera específica, eficiente y expedita a los mandatos legales encomendados a cada institución.



Así, por ejemplo, el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (en lo sucesivo RIOE) establece la distribución funcional de las entidades que componen el Órgano Ejecutivo en Ministerios o Secretarías de Estado, designando a cada uno de ellos un Ministro o Viceministro como titulares de esa institución, artículos 28 y 31 RIOE. En esa perspectiva, la competencia funcional de cada una de esas instituciones persigue un conjunto de objetivos diferenciados pero vinculados directamente al Presidente de la República.

De igual manera, de conformidad al artículo 46 RIOE, las Secretarías de la Presidencia como unidades adscritas directamente al servicio de la Presidencia de la República actúan como órganos de coordinación con los Ministerios y las restantes entidades adscritas al Órgano Ejecutivo. De ahí que, sus competencias funcionales difieran del resto de órganos de gobierno, siendo sus alcances limitados a lo previsto por la ley.

Por tales motivos, a partir de las competencias funcionales atribuidas a cada dependencia que conforma el Órgano Ejecutivo, las Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP) sólo pueden iniciar y tramitar solicitudes de acceso cuando la información requerida por los peticionarios recaiga dentro del ámbito de competencia funcional atribuida a cada institución. Siendo plausible afirmar que esta UAIP solo puede conocer de los procedimientos de acceso cuando ellos recaigan sobre información de cualquiera de las Secretarías de la Presidencia mencionadas en los artículos 46 y siguientes del RIOE, y cada una de sus respectivas unidades administrativas.

En esa línea de argumentos, como se ha señalado anteriormente en otras resoluciones emitidas por esta Unidad, a partir del artículo 102 LAIP y 20 del Código Procesal Civil y Mercantil (en adelante CPCM), los vacíos en el procedimiento de acceso a la información dirigidas a la Presidencia de la República serán suplidos por las disposiciones del CPCM. Por lo que son aplicables todas aquellas disposiciones de ese cuerpo legal relacionadas a la decisión sobre la competencia para la tramitación de un proceso, ya sea este de carácter administrativo o judicial, artículo 45 CPCM.

En el caso de autos, el suscrito advierte que la petición de información incoada por la peticionaria no encaja en ninguna de las atribuciones dispuestas en la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado. Por ello, la información estadística que requiere la solicitante puede ser mejor obtenida a través de los Oficiales de Información de la Fiscalía General de la República<sup>1</sup> y de la Policía Nacional Civil<sup>2</sup>, cuyas atribuciones constitucionales y legales están encaminadas a la dirección funcional de la investigación de ilícitos, la recepción de denuncias por delitos y el mantenimiento de la seguridad pública en general. En tal perspectiva,

---

<sup>1</sup> En la dirección electrónica: <http://www.fiscalia.gob.sv/unidad-de-acceso-a-la-informacion-de-la-fiscalia-general-de-la-republica/>

<sup>2</sup> En la dirección electrónica: <http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/instituciones/policia-nacional-civil>

por esas competencias especiales, la solicitud de información debe presentarse ante esas otras instancias administrativas.

Con base a las disposiciones legales citadas y los razonamientos antes expuestos, se RESUELVE:

1. *Declárese* incompetente la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia de la República para resolver la petición incoada por la señorita [REDACTED], por los motivos expuestos en esta resolución.
2. *Declárese* sin lugar el inicio del procedimiento de acceso a la información pública por ser improponible la solicitud presentada por la requirente, con base en los artículos 102 LAIP, 20 y 45 CPCM.
3. *Notifíquese* a la interesada en el medio y forma por la que se recibió la presente solicitud de información.

  
  
**Pavel Benjamín Cruz Álvarez**  
Oficial de Información  
Presidencia de la República